

Tras cita del martes en la noche en Cerro Castillo:

30 mil órdenes de expulsión pendientes abren debate entre Gobierno y congresistas

J. SOTO y M. MATHIEU

Cerca de cuatro horas y sin celulares estuvieron los parlamentarios de las comisiones de Seguridad de la Cámara y del Senado reunidos con el Presidente y los titulares del Ministerio del Interior (Carolina Tohá), Defensa (Maya Fernández), Segpres (Álvaro Elizalde) y Justicia (Luis Cordero) en Cerro Castillo, en una cita cuyo foco giró en torno a la crisis migratoria que se podría provocar en Chile por el eventual éxodo masivo de venezolanos y las políticas de regularización que puede aplicar la administración de Boric.

Al comienzo de la cita el Gobierno realizó una presentación, de la cual se habría encargado la ministra Tohá, entregando datos de ingresos irregulares a Chile, lo cual, dicen en el oficialismo, sorprendió a muchos legisladores de oposición cuando vieron que la curva de ingreso tuvo su peak más alto durante la administración anterior y que en este período ha disminuido.

Tohá además hizo un repaso por todos los proyectos del *fast track* legislativo II, detallando sus plazos y compromisos, algunos presentes de oposición sintieron que la ministra estaba dando una especie de cuenta frente al mandatario y los presentes. El propio Presidente habría dado a conocer que su administración no llegó del todo preparada para asumir el desafío migratorio.

Más silentes y en segundo plano estuvieron los ministros Álvaro Elizalde, Maya Fernández y Luis Cordero, quien solo expuso un plan carcelario.

Los primeros en dar declaraciones tras las más de tres horas de reunión fueron dos legisladores de oposición: Diego Schalper (RN) y Gloria Naveillán, presidenta de la comisión de Seguridad.

Schalper reconoció que en las cuatro horas de reunión hubo momentos tensos. En la oposición dicen que se dieron principalmente con la ministra Tohá, quien rebatía las críticas políticas que planteaban legisladores

Uno de los temas que marcaron la cita fue qué hacer con las personas que están en esta situación. El senador Ossandón (RN) propone regularizar a todos aquellos que no sean "delincuentes", distanciándose de la visión que tienen otros miembros de su conglomerado político.



CITA.— La reunión entre el Presidente y los congresistas duró cerca de cuatro horas.



De izquierda a derecha, los diputados Gloria Naveillán, Raúl Leiva y Diego Schalper.

de la UDI y RN y que se centran en las urgencias legislativas.

En La Moneda rebaten la tesis que ha impulsado la oposición de que el *fast track* legislativo está detenido y que solo un proyecto de ley ha visto la luz. Dicen que el compromiso es que a partir de septiembre se despachen dos iniciativas, una de ellas el esperado Ministerio de Seguridad que Interior intenta aprobarlo lo antes posible.

Otra de las propuestas que se hizo por parte de la oposición fue la creación de un comité asesor en materias de seguridad.

¿Regularizar a todos?

En el tema migratorio, la reunión con el Presidente estuvo antecedida por una tensa sesión de la comisión de Relaciones Exteriores, en donde la subsecretaria Gloria de la Fuente recibió cuestionamientos de parlamentarios como Schalper por el trato que el Servicio Nacional de Migraciones ha tenido con Bolivia en materia de reconducciones.

Por la noche ese debate se agudizó cuando se tocó el asunto de las 30 mil órdenes de expulsión que el Gobierno tiene pendientes

y cuya ejecución parece incierta. Asimismo, el Gobierno ha reconocido que en su mayoría esas órdenes tienen más de cinco años pendientes.

En ese contexto, a los presentes les llamó la atención la intervención de Manuel José Ossandón, senador RN, quien propuso regularizar a esas personas, a contrapelo de lo que propuso la UDI de generar una fuerza de tarea para encontrarlas e iniciar los procesos de expulsión.

El legislador explicó a este diario que "todos le hablan al público, a la gente que tiene

miedo, y no vemos el problema de fondo, que es que estamos creando un gran bolsón de pobreza, inmenso, de gente que está irregular que no se puede ir y no se puede regularizar. Entonces, si no tiene solución (...) y hay 30 mil personas con orden de expulsión, donde la mayoría de las personas son por razones administrativas, y no delincuentes, bueno, tú lo que deberías hacer es agarrar a todos los delincuentes y expulsarlos, que son quinientos, y al resto regularizarlos para que se desarrollen en Chile, porque no hay solución, es im-

posible echarlos".

En la propia oposición llamó la atención el planteamiento del legislador e incluso el Presidente Boric habría consultado si era una propuesta a modo personal o de todos los partidos de Chile

COMITÉ
Asesor por la seguridad fue propuesto por RN y habría sido aceptado por La Moneda.

Vamos. Legisladores como Andrés Longton y Diego Schalper (RN) indicaron que era solo una idea de Ossandón. La única parlamentaria de oposición que se habría abierto a estudiar la medida fue la diputada Gloria Naveillán.

La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, dijo respecto de la regularización que "el único que planteó la regularización de todas las personas que están en el país fue el senador Ossandón. Hay una situación que nos preocupa y creo que nos tiene que ocupar, que es la de los niños, niñas y adolescentes que están hoy día en situación irregular que asisten al colegio, pero que no tienen registros. Y creo que hay que distinguir entre la delincuencia y aquellos que están siendo un aporte para el país y que requieren la preocupación del Gobierno".

■ Álvaro Bellolio: "Regularizar clandestinos como propone un senador y el Gobierno no es justo para quienes respetan las leyes"

Sobre el debate de si los 30 extranjeros con órdenes de expulsión deben ser regularizados, el exdirector de Migraciones del gobierno pasado, Álvaro Bellolio, dice que sería una medida injusta para los chilenos y quienes actúan en el marco legal.

"Regularizar a todos los clandestinos, como propone el Gobierno y un senador, no es justo para los chilenos ni para quienes respetan

nuestras leyes y solicitan visa de manera regular. Esta medida premia a quienes ingresaron ilegalmente, donde ya tienen acceso preferente a jardines infantiles, empleo sin autorización y atención de salud sin cotizar, mientras los ciudadanos y migrantes legales enfrentan dificultades", sostiene.

Bellolio indica que, con base en la evidencia, "este tipo de políticas solo incentiva que

más personas se arriesguen a ingresar ilegalmente al país".

Y añade que "es urgente establecer medidas que no solo busquen expulsar, sino también presionar para que quienes ingresaron ilegalmente abandonen Chile por voluntad propia. Chile necesita una política migratoria firme que asegure el respeto de nuestras fronteras y la justicia para quienes siguen las reglas".